

le confiere la fraccion 9ª del artículo 72 de la Constitucion de la República, alegando tambien, que con el espresado cobro se vulneran las garantías consignadas en los arts. 4º y 16 de la misma Constitucion; y

Considerando: Que la infraccion de la ley de 2 de Mayo, se hace consistir en que la ley de clasificacion de rentas del Estado de Sonora de 4 de Diciembre del año próximo pasado, dejó subsistentes los derechos de introduccion establecidos sobre los productos de otros Estados, no obstante haber suprimido la fraccion 18 del art. 1º de la ley de 29 de Diciembre de 1870, que determinaba las cuotas que deberian pagar á su estraccion los frutos del Estado, introduciendo de esta manera una restriccion onerosa en el comercio de Estado á Estado.

Considerando: Que no se ha alegado por los quejosos ni aparece justificado en estas actuaciones, que existen ingenios de azucar en Sonora, y que los productos de esos ingenios esten libres de todo impuesto ó gravados con una contribucion menor que la señalada á la azucar de otros Estados, condiciones indispensables para poder decidir que habia sido infringida la ley de 2 de Mayo de 1868.

Considerando: Que no aparece que la circunstancia de no estar gravados con un derecho de extraccion los frutos del Estado, perjudique en algo los intereses de los introductores á Sonora de los frutos provenientes de otros Estados, ni es explicable como dicha franquisia pueda haberse convertido en una restriccion onerosa del comercio de Estado á Estado.

Considerando: Que tampoco existe violacion alguna de las garantías consignadas en los arts. 4º y 16 de la Constitucion de la República.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la misma Constitucion, se decreta:

1º: Se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Sonora en 8 de Junio del presente año, que declaró haber lugar al amparo federal en el presente caso.

2º: La Justicia de la Union no ampara ni protege á los Sres. Claussen y Cº, contra el cobro de quinientos cincuenta pesos que les hace el Administrador de rentas de Guaymas, por la introduccion de dos mil doscientas arrobas de azucar procedentes de los ingenios de Tepic.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*José María Lozano.*—*José María Arceaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre de 1874.—*E. Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de México por Pablo Capultitla, José Medina y Cirilo Flores, contra los procedimientos y sentencia de muerte que contra ellos pronunció el C. Jefe político de Xochimilco, en la causa que les instruyó por asalto y robo.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que se ha impuesto de la causa que se formó en el pueblo de Xochimilco por el Prefecto de dicho Distrito, á José Matilde Jimenez, Pablo Capultitla, Cirilo Flores y José Medina, por el robo con asalto que en compañía de Blas Salcedo y Mateo Medina, ejecutaron

la noche del día 13 de Diciembre del año antepasado de 1873, en la casa de Pablo Silva, vecino del pueblo de San Lorenzo de la municipalidad de Nochimilco.

Jimenez fué sentenciado á la pena capital en 24 de Enero del presente año, y Capultilla, Flores y Medina, lo fueron á igual pena, en 26 del mismo. Ya desde el día 8 habian sido sentenciados por el mismo Prefecto, Blas Salcedo y Mateo Medina, respecto de cuyos dos reos pedirá el que suscribe, en el recurso que interpusieron de amparo, que sigue por cuerda separada del presente recurso, interpuesto por los cuatro reos á que me refiero en la presente respuesta fiscal.

Pasada á revisión la causa de los seis reos contra quienes se instruyó, y que fueron los que asaltaron y robaron la casa de Silva, tuvo á bien el C. Presidente de la República, indultar de la pena capital á Jimenez, Capultilla, Flores y Medina, conmutándosela en la de diez años de prision en Ulua; y respecto de Salcedo y Mateo Medina, nada resolvió dicho C. Presidente de la República, por hallarse pendiente el recurso de amparo que habian interpuesto.

Grandes esfuerzos han hecho los deudos y el defensor de los sentenciados Capultilla, Flores y José Medina, para probar el ningun participio que tuvieron en el asalto y robo; y como consecuencia forzosa de su intento, que han sido inocentes; así es que en el recurso de amparo que interponen, se acogen á la violacion de varias garantías de las que la Constitución otorga.

La ley que en bien de la seguridad pública suspendió ciertas garantías, que es la de 3 de Mayo de 1873, cometió el conocimiento de los delitos á que se contrae, á los Prefectos de los Distritos en cuya demarcacion se ejecutaban, dándoles no sólo la jurisdicción para el juicio de instruccion, sino la plena para sentenciar en dichas causas. Así pues, ni puede legalmente decirse que son incompetentes, ni es Tribunal especial en el sentido que se pretende dar á la jurisdicción que ejercen.

En el interés bien disculpable de los allegados y defensores de los quejosos, está procurar, por cuantos medios les ha parecido conducentes, sustraer de la pena á dichos reos; y sin entrar en la apreciacion especial de cada uno de esos medios, el que suscribe, únicamente tiene el deber y la facultad de examinar si el delito, por sus circunstancias, está bajo el imperio de la ley citada, no le incumbe juzgar ni disentir acerca de la ley.

Que el hecho por que fueron sentenciados Capultilla, Flores y José Medina, está comprendido en la ley de Mayo de 1873, es incuestionable, por que está comprobado que se verificó un robo, de noche, con asalto y en cuadrilla, en la casa de Pablo Silva, que se hallaba habitada por dos mugeres bien jóvenes e indefensas, pues Silva se hallaba ausente de dicha casa. Que á los reos se les oyó en defensa por el defensor que ellos nombraron, tambien está comprobado. Que es competente el Prefecto de Nochimilco, tambien es indudable, segun la misma ley.

Si pues no es cuestionable lo expuesto; si hay identificacion de los reos; si el Juez, por las pruebas que encontró y resultan de la causa, los sentenció á la pena capital, no puede legalmente la justicia federal, en concepto del que suscribe, revisar el procedimiento, esto es, entrar en el exámen jurídico de la fuerza que ante este exámen tuvieran las pruebas de la criminalidad y participacion de los reos, en el hecho notoriamente comprendido en la ley.

Por estas consideraciones, el Promotor pide al Juzgado se sirva declarar, que la Justicia de la Union no protege ni ampara á los reos Pablo Capultilla, Quilo Flores y José Medina, por no haberse violado en sus personas las garantías constitucionales que designan en el recurso de amparo, al ser juzgados y sentenciados por el Prefecto de Nochimilco, por el robo que ejecutaron en la casa de Pablo Silva, la noche del día 13 de Diciembre de 1873.

México, Mayo 8 de 1874.—*J. Biviano Beltrán.*

Sentencia del C. Juez de Distrito

México, Julio 2 de 1874.—Visto el presente juicio de amparo interpuesto por Pablo Capultitla, José Medina y Cirilo Flores, contra los procedimientos y sentencia de muerte pronunciada por el Cefe político de Xochimilco, á virtud de reputar violadas las garantías individuales que consignan los arts. 13, 20 y 23 de la Constitución; visto el informe respectivo; las pruebas rendidas; lo pedido por la parte fiscal, y visto en fin lo que verse debia; atendiendo, á que la violacion de garantías se pretende efectuada al ser juzgados y sentenciarse á la última pena á los quejosos por la autoridad política de Xochimilco, 1º, por ser una ley privativa la de 3 de Mayo de 1873, y un tribunal especial el establecido por ella; 2º, por no haberse nombrado á los acusados defensor abogado; y 3º, por tratarse de la aplicacion de pena de muerte, contra la prevencion constitucional en el art. 23, y del 29 que prohíbe la suspension de garantías de la vida del hombre; y

Considerando, 1º: Que en uso y vigor como se halla la ley que sujeta á los plagiarios y saltadores á una jurisdiccion especial y á la última pena, tan solo corresponde á la autoridad judicial federal, para la resolucion en los respectivos recursos de amparo, investigar si el quejoso, por el delito de que se le juzga, está ó no fuera de la suspension de garantías que determinó la ley; y en consecuencia, si con los actos porque se interpone la queja se violan las garantías individuales que se invocan; que si bien la calificacion del Juez federal debe estenderse, en los casos en que como el presente versan sobre suspension de garantías, á la determinacion del delito en su ejecucion y comision, esto no debe ser hasta el punto de constituir una revision abso-

luta del proceso, y hasta graduar en su forma las pruebas, alegatos y la exacta aplicacion de la ley, como pretenden los quejosos.

Considerando, 2º: Que en el caso, legalmente consta que los quejosos cometieron el delito de asalto en cuadrilla; que el delito se verificó en jurisdiccion de Xochimilco y estando vigente la ley de 3 de Mayo de 1873, conforme á la cual se siguió la causa respectiva y se impuso la pena, todo lo que implica la no violacion de las garantías de los arts. 13 y 23 que invocan los quejosos; y constando además de la causa original que se ha tenido á la vista, que á los reos se les nombró defensor en la forma legal y acostumbrada, y con su esproso consentimiento, (fojas 82 de la causa) lo que justifica la falta de violacion del art. 20 constitucional.

Por tales consideraciones, se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Pablo Capultitla, José Medina y Cirilo Flores, contra los procedimientos y sentencia de muerte pronunciada por la Jefatura política de Xochimilco en la causa formada contra los quejosos por asalto en cuadrilla, por no violarse con ello las garantías individuales que consignan los arts. 13, 20 y 23 de la Constitución.

Hágase saber, publíquese y prévia citacion del C. Promotor fiscal, elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia para su revision.

Lo decretó y firmó el C. Juez 2º de Distrito, Lic. José María Canalizo. Doy fe.—*José María Canalizo.*—*Fernando Zamora*, secretario.

Es copia. México, Julio 11 de 1874 —*Fernando Zamora*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 7 de 1874.—Visto el amparo promovido por Pablo Capultitla, José Medina y Cirilo Flores, ante el Juzgado 2º de Distrito de esta capital, contra los procedimientos y sentencia de muerte que contra ellos pronunció el C. Jefe político de Xochimilco, en la causa que les instruyó por asalto y robo, con arreglo á la ley de 3 de Mayo del año próximo pasado, con cuyos procedimientos alegan los quejosos, se violan en sus personas las garantías de los arts. 13, 20 y 23 constitucionales.

Vista la causa original que como informe remitió el C. Prefecto de Xochimilco, en la que consta el indulto concedido á los reos por el C. Presidente de la República; la prueba rendida por los quejosos; lo pedido por el C. Promotor fiscal; la sentencia del inferior que negó el amparo, y todo lo demás que de autos consta y se tuvo presente; y considerando: que no existe la infracción de los artículos constitucionales citados que alegan los promoventes, se declara: que es de confirmarse y se confirma, por sus propios legales fundamentos, la sentencia pronunciada por el Juzgado 2º de Distrito de esta Capital, que declaró, que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Pablo Capultitla, José Medina y Cirilo Flores, contra los procedimientos y sentencias de que se quejan.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simón Guzman.*—*Luis Velasquez.*

—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa, secretario.*

En copia que certifico. México, Agosto de 1874.—*M. Landa, secretario.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de México por Blas Salcedo y Mateo Medina, contra los procedimientos y sentencia de muerte que contra ellos pronunció el Jefe político de Xochimilco en la causa que les instruyó por asalto y robo.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que con arreglo á lo dispuesto en la ley de 3 de Mayo del año anterior de 1873, fueron sentenciados á la pena capital Blas Salcedo y Mateo Medina, por el robo con asalto y en su trilla que en union de otros individuos, verificaron en la casa de Pablo Silva, vecino de San Lorenzo, en la noche del día 13 de Diciembre del año referido.

Los demandados expresados reos, interponen recurso de amparo, por creer en su opinion que al ser juzgados y sentenciados por el Prefecto de Xochimilco, se han violado en la persona de los quejosos las garantías que la Constitucion otorga en los artículos 13 y 21.

Está en el derecho de los quejosos procurar por cuantos medios sea posible substraerse en el orden legal de la pena y responsabilidad criminal que contrajeron; pero tambien es cierto, que la interpretacion que dan á los artículos citados, es contraria á la ley que, suspendiendo esas garantías en bien del orden y seguridad pública, no puede aceptarse.

El Promotor se ha impuesto de la causa, y de ella resulta comprobado un hecho calificado, que está bajo el imperio de la ley